

Escenario sudamericano: el Mercosur, Washington y Brasilia

Carlos M. TUR DONATTI¹
Carlos A. AGUIRRE ÁLVAREZ

Sobre el actual panorama latinoamericano la prensa diaria y las revistas especializadas registran el despliegue de una oleada de movimientos de *centro-izquierda*, que ha llevado al poder a líderes de tan distintas trayectorias y características personales como Evo Morales, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, Inazio Lula da Silva y Michelle Bachelet. Esta tendencia se veía además confirmada por los recientes triunfos de Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador y la contundente reelección del venezolano Hugo Chávez.

Aparte de la falta de rigor que existe cuando se habla de *centro-izquierda* en esta época de anuncios publicitarios y confusión posmoderna, que lleva a agrupar con ligereza periodística a Evo Morales con Lula y Bachelet, lo que sí resulta indudable es el rechazo de las masas a conocidas consecuencias negativas de la aplicación, desde hace un cuarto de siglo, del modelo neoliberal-globalizador en nuestros países.

Otra cuestión hoy en debate son las políticas concretas que desde el poder aplican Lula o Bachelet, a las que algún analista, para aumentar la confusión, ha llamado *neoliberalismo de izquierda*.

Una segunda aseveración sobre el panorama latinoamericano generalmente aceptada por los analistas y expresada recientemente por Fernando Henrique Cardoso, el influyente expresidente de Brasil, es que América Latina no es prioritaria en la agenda del Departamento de Estado estadounidense.

A partir de estas percepciones —la marejada de *centro-izquierda* y la baja prioridad washingtoniana— se concluye que la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ha fracasado de manera rotunda, como es obvio en su primera versión, y al contrario, el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) se ha fortalecido con la incorporación de Venezuela y el acercamiento de Bolivia.

Más allá de editorialistas que intentan fortalecer sus preferencias políticas internas con sesgados y poco consistentes análisis sobre la coyuntura sudamericana, o de la caudalosa oratoria un tanto macondiana de Hugo Chávez, un intento de examen cuidadoso y reflexivo muestra a la administración Bush en plena ofensiva comercial y militar, a pesar de la resistencia de los gobiernos mencionados y de la oposición de nuevos movimientos sociales que surgen con ímpetu en medio de la crisis generalizada de los partidos tradicionales y de la democracia representativa.

¹ Agradezco la colaboración de Pavel E. Andrade Delgado.

Lo que sí resulta evidente es que Washington ha aceptado el fracaso de su estrategia original de imponer, en el 2005, el ALCA a todos nuestros países, para sustituirla con otra gradualista y bilateral que le está dando buenos resultados. Aparte de México, que con el Tratado de Libre Comercio de 1994 ha soldado cada vez más su economía a la de Estados Unidos en términos de subordinación y empobrecimiento, en la actualidad se han asociado o están negociando en las condiciones que fija el imperio América Central y República Dominicana, y en América del Sur Colombia, Perú y Chile.

En el eje geográfico pacífico-andino sólo resisten a la presión subordinadora Bolivia y ahora Ecuador. En los países volcados al Atlántico se encarnan las mayores resistencias y los proyectos de integración defensiva: Cuba, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

El mayor de estos intentos de integración defensiva, el Mercosur, parece hoy fortalecido por la incorporación de Venezuela, pero el persistente malestar de sectores empresariales paraguayos y uruguayos ante el peso económico y político del eje Brasilia-Buenos Aires ha allanado el camino a la diplomacia estadounidense para ofrecer al gobierno de Tabaré Vázquez un Tratado de Libre Comercio que de llegar a concretarse arrastraría a Paraguay y fracturaría, de manera irremediable, al Mercosur. Esta maniobra de ruptura del Norte tiene una base objetiva que pesa particularmente en Montevideo: las exportaciones uruguayas en 2005 a Estados Unidos ascendieron a 22.7 % del total de sus ventas exteriores, a partir de sólo un 7.3 % del año 2000.

La prensa progresista tiende a resaltar los logros económicos (construcción venezolana-brasileña de una gran refinería para petróleo pesado en Pernambuco o el aumento de las ventas argentinas a Caracas), pero no a registrar las contradicciones de intereses que bloquean un mayor grado de integración en el Mercosur. Un ejemplo particularmente significativo es la denuncia pública hecha por Néstor Kirchner cuando revela la intención de sectores empresariales y políticos paulistas que pretenden monopolizar el crecimiento industrial y convertir al resto del Mercosur en países proveedores de materias primas y consumidores de manufacturas brasileñas. Una actitud defensiva del presidente argentino, consecuente con su política reindustrializadora, consiste en revertir la *primarización* de la economía argentina, resultado de la aplicación del modelo neoliberal que barrió con la mitad de la planta manufacturera a partir de 1976.

La magnitud de la población y la economía brasileñas, así como su desbordamiento sobre los países limítrofes menos poblados y pobres, con el apoyo de una multifacética estrategia de Brasilia, crean nuevos conflictos y mantienen persistentes tensiones. Dejando de lado fricciones menores entre Brasilia y La Paz por la defensa de los terratenientes brasileños en Santa Cruz o por la explotación del rico yacimiento de hierro y manganeso de El Mutún, el actual pleito entre el gobierno nacionalista de Evo Morales y la poderosa petrolera privado-estatal Petrobras por el control de las enormes reservas de gas bolivianas ilustran, de manera clara, las asimetrías de desarrollo y relaciones comerciales que se dan entre los países del espacio sudamericano.

En este conflicto habría que hacer notar que los intereses foráneos ya no son representados predominantemente por las petroleras anglosajonas y sí por Petrobras y por la empresa española Repsol-YPF que de ser empresas nacionales medianas han dado el salto al mercado internacional y compiten hoy con las compañías derivadas de las mitológicas Siete Hermanas. La gran prensa brasileña y española está empeñada en convencer a propios y extraños que la nacionalización del

gobierno paceño fracasará y que los pobres bolivianos y los consumidores finales tienen que financiar su expansión mundial.

Estas contradicciones dentro del ámbito sudamericano son aprovechadas por Washington que desde 2005 ha acentuado su penetración militar. Es sabido que a partir de la administración del demócrata Bill Clinton las fuerzas armadas estadounidenses se han vuelto a desplegar por todo el planeta con el fin de reforzar militarmente su pretendido liderazgo unipolar. Este nuevo despliegue administrado desde cinco comandos —el que se ocupa de América Central, el Caribe y América del Sur tiene su sede en Miami— no sólo ha intervenido en Asia (en 2001 invadió Afganistán, y en el 2003 hizo otro tanto en Irak, además de que en 2006 apoyó la guerra israelí contra Hezbolá y el Líbano), sino que en América del Sur ha impulsado el Plan Colombia que tiene el objetivo declarado de detener el narcotráfico y, de manera primordial, intentar la derrota de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluidas en la amplia y nebulosa lista de las *organizaciones terroristas* de todo el mundo. Parece que dicho plan no está teniendo éxito ni en un objetivo ni en otro, pero el Pentágono y la DEA, aparte de contar con la base militar de Manta en la costa ecuatoriana y los enclaves *antinarcóuticos* asentados en la Ceja de selva peruana, han dado dos nuevos pasos para avanzar en el control de inteligencia y presión militar en el territorio paraguayo.

En agosto de 2005 Donald Rumsfeld, como titular del Pentágono, realizó una gira por América del Sur que según el propio *New York Times* dejó un fuerte aroma a una nueva versión de la Guerra Fría, reverdecida ahora contra los demonios del terrorismo, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El surgimiento de sucesivos gobiernos democráticos en la región, su desconfianza con respecto a la política comercial estadounidense, y en particular la acción diplomática de Brasilia enfrentada a Estados Unidos con el apoyo del Mercosur en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en la elección para un representante latinoamericano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, están detrás de este renacido interés geopolítico y militar de Washington.

El Paraguay, situado en el centro geográfico del Cono Sur, ya durante la presidencia de Ronald Reagan, en la década de 1980, había concedido al Pentágono la oportunidad de construir una base aérea en la región chaqueña, a unos doscientos kilómetros de la frontera con Bolivia. En fechas recientes ha sido reactivada y cabe entonces la pregunta de cómo puede ser útil en la campaña mundial de la Casa Blanca contra el *terrorismo*. Quizás la respuesta es más sencilla: los departamentos del oriente boliviano —los que tienen en sus territorios los mencionados yacimientos de gas y en la burguesía de Santa Cruz al núcleo duro de la oposición a Evo Morales— son los que limitan con el Chaco paraguayo y, de paso, el mensaje de Estados Unidos para Brasilia y Buenos Aires es claro: las mayores concentraciones demográficas, urbanas e industriales del Cono Sur quedan dentro del radio de acción de esta base aérea del comando de Miami.

No se trata de sugerir que Brasil o Argentina estén amenazados directa y abiertamente por Estados Unidos, como lo están Irán o Corea del Norte, sería irresponsable, pero sí se trata de recordar a gobiernos y movimientos contestatarios de un tipo u otro que el *Gran Hermano* no mirará con simpatía heterodoxias mayores, y que los vigila de cerca.

El segundo avance reciente del poder estadounidense en Paraguay resulta de la inauguración de una base *antinarcóuticos* en la población de Pedro Juan Caballero, ubicada en la frontera con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, a quinientos cincuenta kilómetros al norte de Asunción.

La base tiene personal paraguayo preparado y equipado por la CIA y la DEA, y su objetivo declarado es combatir el narcotráfico y el tráfico de armas.

Una zona cercana a esta base es la llamada Triple Frontera, que comparten Brasil, Paraguay y Argentina, la cual ha sido demonizada por Estados Unidos como fuente de financiamiento del *terrorismo* islámico y refugio de sus militantes. Un buen pretexto, sin duda, para justificar la presencia estadounidense en otro presunto escenario de la guerra mundial contra el terrorismo. No cabe duda que la Triple Frontera es un área tradicional de contrabando, tráfico de armas y drogas, pero el exagerado interés de Estados Unidos podría deberse, según algunos analistas, a la existencia del Acuífero Guaraní, una enorme reserva subterránea de agua dulce que se extiende por territorios de Brasil, Paraguay y Argentina, recurso natural cada día más valioso por su futura escasez, como lo hace notar el reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).²

El vicepresidente paraguayo Luis Castiglione, futuro candidato a la presidencia por el oficialista Partido Colorado, ha defendido la instalación de la base en Pedro Juan Caballero y declarado, además, que propicia un acercamiento con Estados Unidos, más allá del Mercosur.

Óscar Raúl Cardoso, el brillante analista internacional del diario *El Clarín* de Buenos Aires, agrega otra dimensión a esta compleja trama: parecería un dislate hablar de guerra contra el terrorismo en el corazón geográfico del Cono Sur, “pero no por eso deja de ser un imán político difícil de resistir para grupos de poder local que ven detrás de aquella guerra la promesa de un orden social severamente controlado”.³

La fuerza del movimiento campesino paraguayo, enfrentada al sector ganadero-soyero que controla el poder en Asunción, y la decisión de Evo Morales de expropiar los latifundios improductivos en los departamentos del oriente boliviano, para lo cual contó con apoyo masivo de campesinos e indígenas, son motivos suficientes para que los grupos de poder locales, con centros en Santa Cruz y la capital guaraní, vean con beneplácito las intromisiones militares de Estados Unidos, y tiendan a identificar a los movimientos sociales contestatarios con el difuso *terrorismo*, que dice combatir la Casa Blanca en todo el mundo.

La reciente y dura derrota del Partido Republicano y el presidente Bush en las elecciones estadounidenses entierra la arrogante estrategia de unilateralismo militarizado del equipo neoconservador, pero ¿significará un cambio mayor de las políticas comercial y de *seguridad* hacia América Latina? Parece improbable que Washington modifique de manera sustancial su planteamiento de avanzar por la vía bilateral, aunque los demócratas quiten al presidente la facultad de *fast track* y la nueva mayoría legislativa introduzca algunas enmiendas proteccionistas, por ejemplo, en el tratado con Colombia firmado en fechas recientes, y que debe ratificar el Congreso.

Si el resultado de las elecciones en el país del norte significó entre otras cosas un alto grado de rechazo a la política guerrera del presidente, en América Latina los resultados electorales recientes en Brasil, Nicaragua, Ecuador y Venezuela tienden a deprimir aún más la influencia política estadounidense, y Brasilia aprovecha la coyuntura para proponer la creación de una fuerza militar sudamericana, una especie de OTAN del sur continental. El objetivo de esta fuerza internacional: “impedir una aventura militar o la presión de algún país sobre la región o sobre una nación sudame-

² Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2006*.

³ *El Clarín*. Buenos Aires, 26 de agosto, 2006.

ricana”, demuestra que las posibles amenazas armadas y el grado de intervención militar estadounidenses preocupan a las elites sudamericanas, al punto que Brasil asume la iniciativa como un paso decisivo en su designio estratégico de consolidarse como la potencia hegemónica en la región.

Este proyecto no es única ni prioritariamente brasileño. El reelecto presidente Hugo Chávez y el oficialista Partido Socialista chileno ya lo habían propuesto, pero es evidente que el peso económico y político de Brasil convierte a esta propuesta en altamente viable. Además, la respalda con su avanzada industria bélica que produce aviones de combate, submarinos y misiles, la cual es proveedora de casi todos los ejércitos sudamericanos. Raúl Zibechi, el talentoso e informado analista uruguayo, sostiene que ante el desplazamiento del poder político estadounidense ha llegado el tiempo de inversiones masivas en las fuerzas armadas con el fin de modernizar su equipamiento y enfrentar los retos del futuro.⁴

En esta perspectiva asoman nuevos escenarios y preguntas inéditas. En América del Sur ¿estamos presenciando un despliegue múltiple y un avance decisivo de Brasil como un subimperialismo regional al estilo de Sudáfrica o India?, ¿qué relaciones se irán forjando entre economías crecientemente globalizadas, democracia de baja intensidad y fuerzas armadas reforzadas? Los pueblos que han rechazado en las urnas una y otra vez el neoliberalismo globalizador ¿asistirán en forma pasiva a este gran juego de las elites políticas sudamericanas? Ningún gran movimiento social o de poder que apuntara en nuestros países al futuro tuvo éxito sin el apoyo convencido de la gente de a pie, de las mujeres y los hombres comunes. En este escenario ambiguo y apasionante que comienza a vislumbrarse, ¿cómo se ubicarán los nuevos movimientos sociales y qué propondrán las nuevas tendencias de izquierda? ¿Se atreverán de nueva cuenta a emprender la ardua y excitante empresa de tomar el cielo por asalto? El futuro se abalanza sobre nosotros y de nuevo nos desafía.

⁴ *La Jornada*. México, 4 de diciembre, 2006.